

James Petras

Venezuela: una década de democracia capitalista

JAMES PETRAS es Profesor-asociado de Ciencia Política y Administración Pública. Es Director del Latin American Development Studies en el Instituto de Administración Pública de la Universidad de Pennsylvania, y autor de numerosos artículos y libros sobre América Latina, entre los que se encuentran *Politics and Social Forces in Chilean Development* (University of California Press, 1969). Es coeditor de *Latin American Reform or Revolution*

Para la mayoría de los escritores norteamericanos, muy en particular para los especialistas en asuntos latinoamericanos, Venezuela ha venido, desde 1959, experimentando una revolución democrática¹. Bajo los auspicios del Partido Acción Democrática (AD), se sostiene, se han llevado a cabo una serie de cambios de gran alcance que han reestructurado fundamentalmente la sociedad venezolana. La política del actual Presidente de la república, Sr. Caldera, miembro del Partido Social Cristiano, es considerada, en general, como la continuación de la revolución "democrática" iniciada por AD. Una década es lapso suficiente para poder analizar y evaluar de cerca los argumentos presentados en favor de la alternativa democrático-capitalista frente a la revolución social. Por medio de la determinación de los cambios que se han operado, podremos ver si Venezuela es un modelo viable para el resto del hemisferio.

La política económica de estancamiento

El principal defecto de los diferentes estudios sobre la política de Venezuela es la seria subestimación que se hace de los problemas económi-

¹Robert J. Alexander, *The Venezuelan Democratic Revolution*, New Brunswick, Rutgers University Press, 1964; Edwin Lieuwen, *Venezuela*, Londres, Oxford University Press, Segunda edición, 1964; John D. Martz, *Acción Democrática: Evolution of a Modern Political Party in Venezuela*, Princeton, Princeton University Press, 1965; John Friedman, *Venezuela: From Doctrine to Dialogue*, Syracuse, Syracuse University Press, 1965.

cos y sociales a largo plazo que han surgido en la pasada década o más de desarrollo, y del impacto que ellos tienen en la política.

Durante la década del 60, la economía venezolana quedó estancada, mientras la desigualdad entre las diferentes clases se iba acentuando. La tasa de crecimiento per capita durante los años 1961-66 fue del 1 por ciento, más o menos el 60 por ciento *menos* que la tasa mínima de crecimiento estipulada por la Alianza para el Progreso (2,5%)². En 1968 aumentó ligeramente al 1,6 por ciento. Después de 10 años, Venezuela continúa siendo extremadamente dependiente de la industria petrolera, 90 por ciento de la cual pertenece a corporaciones norteamericanas³. Esta industria proporciona el 30 por ciento del Producto Nacional Bruto, el 90 por ciento de los ingresos en divisas por concepto de exportaciones y el 65 por ciento del ingreso fiscal⁴. Las empresas norteamericanas que operan en Venezuela son corporaciones multinacionales con inversiones en otras zonas petroleras, especialmente en el Medio Oriente. Cuando el gobierno democrático-capitalista de Venezuela incrementó la participación del país en los beneficios, hasta un 48 por ciento, las corporaciones multinacionales comenzaron a elevar su producción en el Medio Oriente y el Canadá. Como resultado de ello, a partir de 1958, se pudo comprobar una abrupta declinación en las nuevas inversiones en el sector petrolero. Las compañías petroleras estadounidenses redujeron sus gastos de capital en Venezuela de tal manera, que en 1960 la inversión bruta y fija declinó en un 22 por ciento⁵. Como no fue lo bastante radical como para nacionalizar la industria petrolera y promover la expansión mediante incentivos públicos, ni lo bastante conservadora como para proporcionar el tipo adecuado de incentivos para las inversiones extranjeras, la política de AD dio lugar al estancamiento.

²Consejo Interamericano de la Alianza para el Progreso (CIAP), *El Esfuerzo Interno y las Necesidades de Venezuela*, OEA/SER.H/XIV CIAP/178, 7 de noviembre de 1967, Pan American Union, Washington, D. C., p. 3 (de aquí en adelante llamado Informe CIAP sobre Venezuela).

³Arturo Sosa, "Structural Factors in Venezuelan Economic Development" (mimeografiado y presentado a la Conferencia sobre Venezuela de la John Hopkins School of Advanced International Studies, 1969), p. 3.

⁴Guillermo Moron, "Venezuela", en Claudio Véliz (ed.), *Latin America and the Caribbean*, New York, Praeger, 1968, p. 144.

⁵Informe CIAP sobre Venezuela, p. 5.

La ausencia de una expansión dinámica en el sector petrolero afectó a otras esferas económicas relacionadas con aquel, tales como la industria del acero que provee de tubería. Durante el pasado medio siglo, Venezuela ha experimentado el desarrollo del subdesarrollo; es decir, el incremento en la penetración y el control por parte de inversionistas extranjeros, el aumento de la dependencia de sectores económicos de propiedad extranjera y una vulnerabilidad cada vez mayor respecto de centros externos de decisión. El contraste entre el pasado y el presente es altamente sugestivo. En 1920, el petróleo constituía el 2 por ciento del valor de las exportaciones; en la década de 1960, este rubro en manos de empresas norteamericanas, constituyó el 90 por ciento del valor de las exportaciones (y, conjuntamente con el mineral de hierro, también de propiedad norteamericana, el 97 por ciento). No hay ningún motivo para pensar que esta relación de dependencia habrá de cambiar con el gobierno de Caldera. El sector principal de la economía, la industria petrolera, se encuentra en *declinación*. El valor de las exportaciones en 1961 fue un 11 por ciento menor que en 1957. Entre los años 1962 y 1966, el total de las exportaciones declinó de 2.500 a 2.300 millones de dólares⁶. En efecto, se ha experimentado un agudo descenso en las nuevas inversiones y estancamiento en las exportaciones; se ha puesto en operación un número reducido de pozos, y la exploración prácticamente ha cesado. El flujo neto de capital hacia Venezuela, a partir de 1960, ha sido negativo.

El esfuerzo llevado a cabo para la industrialización acusa rasgos definitivos de desaceleración: la tasa que era de un 11 por ciento en 1950-1959, disminuyó hasta el 7,5 por ciento en 1960-1966 (El Plan Nacional estipulaba un 13 por ciento de crecimiento)⁷. Existen indicios de que Venezuela bien puede estar, en la actualidad, en el punto crítico en el que las oportunidades fáciles para el desarrollo basado en la sustitución de la importación se hallan exhaustas. La producción de las industrias tradicionales de bienes de consumo representa la mayor parte de la producción total (52 por ciento), mientras que la industria pesada es todavía un factor marginal que sólo representa el 10 por ciento del total de aquella⁸. El factor siempre presente del bajo poder de compra

⁶ *Ibid.*, p. 94.

⁷ *Ibid.*, pp. 50-51.

⁸ *El desarrollo industrial de Venezuela*, CORDIPLAN, 1968.

de la mayoría de los venezolanos requiere que la industria busque nuevos mercados de exportación en el exterior, una empresa para la que Venezuela aparece especialmente mal preparada, dados los elevados costos y beneficios que caracterizan la actividad industrial. El desarrollo industrial se ha basado en programas gubernamentales de "bienestar": créditos, bajos impuestos, altas tarifas y fuertes inversiones en la infraestructura, financiadas por los ingresos petrolíferos. Tras la pared proteccionista instaurada por los revolucionarios demócratas de Venezuela han surgido grandes empresas monopolísticas que producen mercancía chabacana y de elevado precio. Un estudio industrial llevado a cabo en 1960 destacó que 196 unidades de la gran industria producían el 60 por ciento del total de la producción industrial⁹.

La estrategia del desarrollo democrático-capitalista venezolana no ha sido dirigida hacia la utilización máxima de los recursos humanos existentes. Al poner el énfasis en el desarrollo de la industria intensiva de capital —decisión que estaba, en gran parte, de acuerdo con las necesidades de maximización de beneficios de los inversionistas tanto extranjeros como nacionales—, las emergentes industrias no han podido absorber la creciente fuerza de trabajo urbana. Los beneficios del crecimiento industrial son cosechados por los inversionistas, gerentes, profesionales, y en un grado mucho menor, por los empleados y por una delgada capa de obreros industriales sindicalizados. La gran mayoría de la fuerza de trabajo urbana, que no se halla directamente integrada en la producción de la fábrica, se halla excluida de los beneficios de la expansión industrial. Es precisamente a través del desarrollo capitalista subvencionado por el Estado que las desigualdades se han venido acentuando. El desempleo ha oscilado desde el 17 al 10 por ciento de la población económicamente activa en los centros urbanos¹⁰. El desempleo disfrazado, que se encuentra, principalmente, en la expansión del pequeño capitalismo y en las ocupaciones de subsistencia asociadas con el sector de servicios, y el desempleo son resultados del desplazamiento de los trabajadores rurales. Y ambos son productos de la estrategia del desarrollo capitalista intensivo y orien-

⁹ *Encuesta Industrial de 1961*, CORDIPLAN, noviembre de 1963.

¹⁰ *Informe CIAF sobre Venezuela*, p. 114.

tado hacia los beneficios escogida por los políticos demócrata-capitalistas de Venezuela.

En sus esfuerzos por crear un clima favorable para la inversión extranjera, los líderes políticos de AD y COPEI han creado un clima desfavorable para las reformas sociales y económicas. El conservantismo del liderazgo de AD, el cual dominaba en el gobierno, fue decisivo en las políticas y prioridades en pro de los negocios que se establecieron. La hostilidad de la "vieja guardia" de AD hacia los grupos más jóvenes de inclinación populista-nacionalista, en el seno del partido, y hacia los fidelistas y comunistas, tanto en los sindicatos como en las universidades, iba aparejada con un acercamiento a la clase militar y los grupos inversionistas. La aceptación y apoyo prestados por AD a la inversión en gran escala, tanto nacional como extranjera, le hicieron mantener un rígido control sobre la clase trabajadora y el estudiantado, para así evitar la movilización política de las masas y para instituir una política de clientela. Muchas de las restricciones impuestas sobre el debate político y económico subsiguiente, y la incapacidad de AD para enfrentarse a cierto número de cuestiones socioeconómicas claves pueden ser imputadas a su selección inicial de aliados y enemigos políticos. La consiguiente exclusión de la izquierda de la acción política abierta, a su vez, limitó la capacidad de los restantes reformistas moderados, dentro de AD, para movilizar eficazmente su apoyo a una política redistributiva más enérgica. Los lazos que surgieron entre la "vieja guardia" de AD y la comunidad empresarial y financiera se expresaron a través de: a) entendimiento tácito con los militares, el cual incluyó la mantención de una parte sustancial del presupuesto y la decisión de no emprender reorganización alguna o reducción del gasto en armamentos; b) acuerdo con las compañías petroleras en el sentido de no nacionalizar sus pertenencias; c) alianza política formal con el partido COPEI, dominado por los sectores de negocios, y más tarde con el derechista Frente Nacional Democrático dirigido por Arturo Uslar Pietri. A cambio del control del gobierno y de la oportunidad de promover los intereses de la clase empresarial y de la clase industrial nacional, la vieja guardia de AD aceptó renunciar a su programa populista y anti-imperialista. Para los miembros socialmente móviles de la clase media, AD proporcionó las oportunidades necesarias de avance y empleo, a través de la expansión de la industria, el comercio y la burocracia

gubernamental (los gastos administrativos se incrementaron en un 9 por ciento sólo en 1966). Los programas de bienestar social que fueron producto, principalmente, del ingreso de la industria del petróleo, beneficiaron a las clases media y media superior; aquellos con empleo fijo, status profesionales, acceso a los dirigentes políticos de AD y funcionarios sindicalistas. La inversión pública decreció, pero los gastos "operacionales" se incrementaron debido al exceso de personal burocrático, compuesto por incondicionales servidores de AD en planillas de sueldos gubernamentales.

La política nacional y el desarrollo económico continuaron siendo excesivamente dependientes del capital extranjero ya que la legislación tributaria está llena de lagunas, lo que da origen a que los opulentos venezolanos se hayan convertido en expertos evasores del pago de impuestos. Entre 1960 y 1966 el gobierno central llegó a depender, en forma extremada, de la industria del petróleo en la recaudación de sus ingresos. En 1960, el 58,2 por ciento del ingreso a las arcas nacionales provenía del petróleo, y para 1966, este porcentaje se elevó a 62,2¹¹. La burguesía venezolana tiene uno de los más bajos índices de imposición en el mundo; el ingreso de las industrias que no son del petróleo continúa siendo extremadamente bajo. Frente a la posibilidad que existía de legislar tanto el impuesto a la renta como el pago de impuestos destinados a la seguridad social, la burguesía venezolana presionó por medio del retiro de capital. El gobierno capituló.

Ya que la burguesía venezolana depende altamente del capital norteamericano, cuando la industria del petróleo no se encuentra en proceso de expansión, los inversionistas nacionales fácilmente pierden la confianza. La consiguiente inseguridad puede dar origen a una fuga masiva de capital en un período corto de tiempo, dada la facilidad con que pueden transferirse los fondos. La fuga de capital o la simple amenaza de ella hizo que la política nacional de AD (y ahora la de COPEI) dependiese, en alto grado, de la buena voluntad del inversionista, ya sea éste nacional o extranjero, y no de las necesidades de los grupos de bajos ingresos o de la planificación económica racional.

La reforma agraria bajo el capitalismo democrático

La experiencia venezolana en cuanto a la reforma agraria es un fracaso,

¹¹ *Ibid.*, p. 75.

por tres razones: a) no ha debilitado sustancialmente el poder de los grandes terratenientes y como resultado, los programas de ayuda técnica y créditos han beneficiado, principalmente, a los grandes agricultores comerciales; b) no ha proporcionado tierra a más o menos dos tercios de la clase campesina que la necesitaba urgentemente, y c) no ha proporcionado suficiente crédito, ni asistencia técnica u otros medios para la promoción del desarrollo en aquellas haciendas en las que se radicaron los campesinos receptores de tierras.

La ley de reforma agraria fue aprobada el 5 de marzo de 1960 y constituye, fundamentalmente, un compromiso entre el gran terrateniente y la intención original de AD de llevar adelante un "profundo cambio estructural". En aquella época se estimaba en 380.000 el número de familias receptoras de tierra potenciales, con un total de 2.2 millones de personas afectadas¹². El 58 por ciento de este total correspondía a trabajadores agrícolas sin tierra, que eran el grupo más numeroso. Desde el momento en que se puso en marcha el programa, aproximadamente 100.000 familias campesinas han recibido algún tipo de tierra¹³. La "reforma agraria" venezolana no ha sido objeto de resistencia de parte de los latifundistas. El gobierno pagó precios muy elevados por las tierras de los grandes propietarios (quienes subieron los precios para sacar ventaja de la reforma agraria "democrática"), permitiéndoles en algunos casos la adquisición de nuevas tierras en lugares alejados. Además, la ley de reforma agraria no se aplicó, en general, a las grandes plantaciones comerciales operadas con eficiencia. En consecuencia, la mayoría de las primeras expropiaciones tuvieron lugar entre las haciendas más arruinadas y entre los terrenos públicos no explotados. Su puesta en funcionamiento requirió enormes inversiones y de ahí los costos extremadamente elevados para llevar a cabo los cambios limitados que se lograron en Venezuela. Un costo que ningún otro país latinoamericano puede afrontar. Entre 1963 y 1965, la mayor parte de la tierra (58 por ciento) provino de las haciendas estatales, ya que AD protegía y estimulaba el desarrollo de grandes haciendas comer-

¹²J. Raúl Alegrett R., "Venezuelan Agrarian Reform: Its Impact and Outlook" (trabajo mimeografiado presentado a la Conferencia sobre Venezuela, 1969, de la John Hopkins School of Advanced International Studies), p. 3.

¹³*Ibid.*, p. 7.

ciales¹⁴. En total, el 45 por ciento de la tierra distribuida es de origen público; en muchos casos su calidad no era la mejor ni tampoco lo era su posición geográfica en relación con los mercados. Hacia 1964 se restó énfasis a la fase redistributiva de la reforma agraria. El director del Instituto Agrario Nacional señala: "El programa fue orientado hacia la consolidación física del asentamiento agrícola, prestando creciente atención al factor económico"¹⁵. Hacia 1969, el mismo funcionario declaraba que la política agraria era una política de clase orientada hacia el capitalismo agrícola comercial: "...se ha obtenido poco progreso significativo en la reducción de la concentración de la propiedad rural en pocas manos, en el incremento de la producción o ingreso de los campesinos, o en la formación o vigorización de las empresas económicas y organizaciones de los pequeños agricultores"¹⁶. Los beneficiarios de la reforma agraria representan menos del 13 por ciento de la producción agrícola y sólo el 5 por ciento de la producción de carne¹⁷. Es más, los grandes agricultores comerciales controlaron el crecimiento y la producción de los productos de mayor beneficio. Debido a que AD-COPEI decidieron subsidiar a la clase latifundista, las limitaciones financieras han constreñido enormemente la expansión del programa de reforma agraria, incluso en el caso de que ellos hubieren querido, o deseado, llevarla adelante.

La mayor parte de las grandes haciendas no han sido afectadas. Aunque los grandes terratenientes ocupan una parte menos importante en la economía tomada como un todo, continúan manteniendo en sus manos recursos importantes, tanto económicos como políticos, que les permiten configurar la política agraria y la distribución de fondos para el desarrollo agrícola. Como resultado de ello, muchos de los "beneficiarios" de la reforma agraria se hallan operando sobre bases de subsistencia o han abandonado sus parcelas debido al fracaso económico, que es en gran parte el resultado de la falta de crédito. Entre los beneficiarios de la reforma agraria, el 70 por ciento no emplea productos químicos, el 62 por ciento no compra semillas, el 80 por ciento

¹⁴Raúl Domínguez Capdeville, "El camino para una reforma agraria de tipo nacionalista", *Ruedo Ibérico*, N° 22/24, p. 255.

¹⁵Alegrett, *op. cit.*, p. 6.

¹⁶*Ibid.*, p. 6.

¹⁷*Ibid.*, pp. 7-9.

no compra animales, y el 61 por ciento no compra maquinaria¹⁸. Por detrás de la ideología de masas y de la retórica de reforma agraria, AD ha promovido la modernización de la agricultura a gran escala y el incremento de la producción de rubros comerciales. Se ha desarrollado una nueva diferenciación de clases entre los "beneficiarios": aquellos que inicialmente habían alcanzado el éxito y que se hallan en la etapa de la expansión y los que han encontrado dificultades y que por lo tanto han pasado a la lista de personas no elegibles para futuros créditos; las parcelas sin crédito dan por resultado la vuelta al minifundio de subsistencia y al mediero que trabaja para el vecino más próspero. Un observador pudo notar que más del 50 por ciento de los beneficiarios de la reforma agraria obtenían menos de us\$ 250 anuales de la actividad agrícola que desarrollaban, mientras que menos del 12 por ciento lograban ganar us\$ 1.000 o más¹⁹. Pese al hecho que los grandes agricultores comerciales constituyen sólo una fracción de la población rural, sin embargo reciben más de la mitad de los créditos agrícolas (Bolívares 491.950.000) comparados con Bolívares 475.605.000 que son destinados a los campesinos²⁰.

Los beneficios en declinación de los campesinos reflejan el poder, también en declinación, del campesinado en la política nacional, tendencia que continúa bajo el gobierno de Caldera y del COPEI. Dentro del esquema de la política agraria, los grandes agricultores comerciales obtienen una parte creciente de los beneficios a través de sus vínculos con la comercialización y la elaboración de los productos agrícolas. Dentro de la coalición de AD, el campesinado viene ocupando una posición, cada vez mayor, de subordinación al capitalismo urbano; en el campo, AD se halla cada vez más vinculada con el agricultor capitalista más eficiente y sólo presta atención marginal a aquellos beneficiarios que no han logrado el éxito. Para las 200.000 familias campesinas (2/3 del total del campesinado) que no han recibido aún tierras, las posibilidades que tienen con los partidos burgueses son, en efecto, desalentadoras. Pese a que el crecimiento del ingreso per capita es apenas adecuado, el nivel del ingreso de la gran parte de la población rural continúa siendo el de subsistencia.

¹⁸ *Ibid.*, p. 9.

¹⁹ *Ibid.*, p. 11.

²⁰ *Informe CIAP sobre Venezuela*, p. 45.

Los agricultores capitalistas representan un importante componente de la clase dominante nacional, pese a la insignificancia "cuantitativa" de la contribución del agro al PNB. Los representantes de la Federación de Agricultores y de la Federación de Ganaderos han sido elegidos para ocupar las posiciones más elevadas en los más importantes organismos venezolanos que representan a intereses comerciales (FEDECAMARAS)²¹.

La burocratización de las organizaciones campesinas y de los sindicatos, conjuntamente con los intentos de "despolitizar" la esfera de decisión económica (vale decir, permitir que las élites comerciales y sus organismos políticos planifiquen y administren los planes gubernamentales) sugieren la existencia de una integración considerable y directa de las esferas políticas y económicas. Las organizaciones independientes, que representan los intereses de las masas, son menos aparentes que los organismos de representación funcional dominados por los intereses económicos de las élites. El modelo político de Estado corporativo ha venido haciéndose cada vez más evidente no sólo en Venezuela, sino también en toda América latina. Llamar democráticos a los políticos venezolanos resulta un error de magnitud: la burocratización, el apoliticismo y el tecnocratismo engranan perfectamente con los conceptos que albergan los círculos de negocios conservadores acerca de la armonía de clases y la idea tradicional católica de una sociedad orgánica. Los valores sociales y políticos católicos tradicionales se hallan vinculados a las necesidades de un desarrollo capitalista moderno. El desarrollo y la planificación económicas, tal cual ocurre hoy en día, emplean las ideas democráticas como fachada para el control del poder de decisión oligárquico y elitista. Las personas claves encargadas de la formulación de la política continúan proviniendo de las altas esferas de los negocios y existe un continuo intercambio de personal, tanto de la esfera política hacia la de los negocios, como a la inversa. La intrincada y elaborada maraña de relaciones que involucra la interacción entre los intereses económicos privados y los partidos dominantes, los organismos administrativos y organizaciones ejecutivas, limita en forma considerable el tipo de problemas a tratar y las opciones e instrumentos disponibles que tienen los encargados de

²¹ Alegrett, *op. cit.*, pp. 13-14.

la planificación nacional en la configuración de la política económica y social a seguir.

En el gobierno de Caldera, la política agrícola tiene poco o nada que ver con las necesidades de la población de 1 a 1.5 millón de personas sin o casi sin tierra e incluso con la mayoría de los campesinos que ya las han recibido durante el gobierno de AD. La atención del gobierno se halla centrada en la promoción de los intereses de una minoría compuesta por grandes y medianos agricultores y comerciantes. Bajo el lema de "promover la productividad", los "revolucionarios" social-cristianos venezolanos, elegidos en parte gracias al voto campesino, han empleado los recursos gubernamentales para proveer incentivos para la promoción de la productividad de la élite. La política electoral en Venezuela es, en gran medida, un medio para que los corredores políticos en el gobierno comercien con las élites económicas: intercambian los ingresos gubernamentales y la legitimidad del avance social de ellos mismos y el de sus clientes inmediatos, mientras, por otro lado, mantienen el mito de la "pluralidad democrática".

El costo de la estabilidad política

La política adoptada por el Presidente venezolano Rómulo Betancourt, durante su período (1959-1964), fue un rechazo directo de los programas nacionalistas-populistas de AD. Para aplacar de alguna manera los resquemores de los Estados Unidos y de los círculos de negocios venezolanos, Betancourt rechazó la idea de nacionalizar las industrias-claves como la del petróleo. AD aceptó la dependencia de la nación del capital norteamericano y en cambio decidió incrementar la participación venezolana en los beneficios. En igual forma, AD rechazó la idea de la expropiación rápida y profunda de las grandes propiedades agrícolas y adoptó la colonización de tierras pertenecientes al Estado, el pago en exceso de extremadamente costosas tierras en manos de particulares, y el subsidio para la modernización e incremento de la eficiencia en la producción de las grandes haciendas. La administración civil, los aparatos tanto militar como policíaco no fueron tocados en absoluto; el principal cambio consistió en la expansión de la burocracia para así acomodar a los que apoyaron a AD. La antigua maquinaria administrativa, producto, principalmente, de anteriores gobiernos conservadores, jamás ha respondido a las demandas populares de innovación

social. Para poder gobernar, Betancourt decidió llegar a acuerdos con las instituciones principales del viejo orden, con los inversionistas nacionales y extranjeros, con los militares y los grandes terratenientes. Sobre la base de un partido altamente burocratizado y con la maquinaria de los sindicatos obreros estrechamente ligada a la burocracia gubernamental (el aparato organizativo y las actividades de la Federación Campesina, dominada por AD-COPEI, son financiados por el Ministerio del Trabajo), y extrayendo el apoyo financiero de la tesorería de la nación, y el apoyo físico de la fuerza policíaca y militar, Betancourt, Leoni, y el ala de extrema derecha de AD, pudieron finalmente poner fuera del seno del partido a los elementos populistas, nacionalistas y reformistas moderados. El nuevo orden político concebido por el ya expurgado y conservador AD comprendía, pues, una gama mucho más estrecha de partidos y puntos de vista. La competencia política se basó en un consenso *opuesto* a la nacionalización del petróleo, a la rápida y extensa expropiación de las grandes haciendas y a la movilización política. Para convertir a Venezuela en una democracia capitalista, se lanzó una represión masiva con el fin de evitar la movilización de los estudiantes nacionalistas, los subempleados y desempleados de Caracas. Simultáneamente, se frustraron intentos conspirativos de parte de los que apoyaban a Pérez Jiménez. El nuevo orden político fue establecido a la fuerza, pese al serio desafío revolucionario de las fuerzas nacionalistas-populistas durante el período 1959-1963. Las rebeliones estudiantiles y las demostraciones populares fueron seguidas de acciones guerrilleras y pronunciamientos militares²². La derrota de la izquierda revolucionaria y de la derecha antiparlamentaria de Pérez Jiménez se debió, en gran parte, a la cooperación y apoyo que Betancourt recibió de los militares y la policía, de funcionarios del gobierno norteamericano, inversionistas y misiones militares. La estabilidad política relativa alcanzada desde 1964 estaba basada en la colaboración de AD con los partidos políticos de derecha orientados hacia la actividad comercial. La estabilidad política está basada en la capacidad de estos partidos para solucionar sus diferencias políticas y de unirse contra sus enemi-

²² Este punto se halla considerado con mayor detalle en un ensayo anterior, "Revolution and Guerrilla Movements in Latin America: Venezuela, Guatemala, Colombia and Perú", en James Petras y Maurice Zeitlin, *Latin America: Reform or Revolution*, Fawcett, New York, 1968, pp. 329-369.

gos comunes, sociales y políticos. Todo intento de legislación que fuera en desmedro de los privilegios y prerrogativas de estos partidos daría por resultado un *impasse* político. La estabilidad política alcanzada ha sido pagada con la incapacidad del sistema político para redistribuir el ingreso, poner en ejecución una ley progresiva de impuestos a la renta, lograr solucionar el desempleo masivo, solucionar el problema que presentan las empresas ineficientes que se dedican a la fabricación de productos con precios exorbitantes. Mientras tanto AD se ha visto, cada vez más, desprovista de corrientes reformistas: en 1960 rechazó la posición presentada por su sector juvenil ("Documento de los Jóvenes de Acción Democrática"), que más tarde formó el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR); en 1962, expulsó al dirigente del sindicato campesino, Quijada, por pedir que la reforma agraria fuese llevada a sus últimas consecuencias; en 1968, perdió de sus filas a los reformistas moderados dirigidos por Luis B. Prieto Figueroa (ex presidente de AD en los años 1964-67), quienes, posteriormente, constituyeron el Movimiento Electoral Popular (MEP). En 1970, AD se hallaba compuesta, en su mayor parte, por burócratas de partido que comparten una hostilidad generalizada contra el cambio social profundo, una aceptación general de los valores que definen a los hombres de negocios y una obsesión por el saqueo de la hacienda pública.

Desarrollo social y reforma urbana

Los líderes políticos de la democracia capitalista de Venezuela se hallan frente a muchos de los mismos agudos problemas sociales en las zonas urbanas que confronta el resto de América latina: desempleo, habitación y educación inadecuadas, y grandes desigualdades en los ingresos.

En el campo de la vivienda, cierto número de instituciones han invertido considerables sumas de dinero en la construcción urbana. En casi 40 años, el Banco Obrero, por sí solo, ha invertido 1.900 millones de bolívares en viviendas, 60 por ciento de los cuales se destinaron a Caracas²³. La construcción privada alcanza a varios cientos de millones de bolívares. Y sin embargo, el 50 por ciento de las familias caraqueñas

²³Alberto Morales Tucker, "The Urban Dilema of Venezuela: The Case of Caracas" (trabajo mimeografiado presentado a la Conferencia sobre Venezuela de la John Hopkins School of Advanced International Studies, 1969), p. 8.

no pueden adquirir habitación, sea ésta de origen público o privado, debido a lo bajo de sus ingresos²⁴. Los revolucionarios democrático-capitalistas no sólo han fracasado en la resolución del problema de la vivienda para grupos de baja renta, sino que también han sido testigos de la creciente miseria urbana en la ciudad de Caracas. Un planificador urbano venezolano ha indicado que mientras los *barrios* cubrían 5% del total de las áreas urbanizadas en 1938, este índice se había elevado al 15 por ciento en 1959 y al 18 por ciento en 1966²⁵. Los "barrios" se hallan situados en zonas amenazadas de inundaciones, y padecen de una falta casi total de elementos sanitarios. En ellos reside el 30 por ciento de la población de Caracas²⁶. La mayor parte de los recursos, tanto del gobierno como del capital privado, que han producido el "boom" de la construcción en Caracas ha beneficiado a las clases media y alta. Un informe del Comité Interamericano de la Alianza para el Progreso dice lo siguiente:

"Respecto de la vivienda... la falta de acceso a ella de parte de los grupos de menor renta aún constituye un serio elemento dentro de la estructura social venezolana"²⁷.

Los políticos democrático-capitalistas y quienes los apoyan en los Estados Unidos han presentado sus realizaciones educacionales, conjuntamente con la reforma agraria, como sus más grandes éxitos.

Sólo uno de cada cinco estudiantes que ingresan a la escuela completa los seis años de educación primaria en las áreas rurales y sólo 1 de tres estudiantes en la nación tomada como un todo²⁸. Aunque se logró cierto progreso a comienzos de la década de 1960, sin embargo a partir de ese período, la situación no ha mejorado y es muy posible que en la actualidad sea aún peor. Un observador destaca que la matriculación en las escuelas rurales ha declinado de 314,194 en 1959/60 a 291,537 en 1967/68²⁹. En Caracas, la proporción de niños

²⁴ *Ibid.*, p. 21

²⁵ *Ibid.*, p. 21.

²⁶ *Ibid.*

²⁷ *Informe CIAP sobre Venezuela*, p. 17.

²⁸ José Rafael Revenga, "The Efficacy of Education in Venezuela" (trabajo mimeografiado presentado a la Conferencia sobre Venezuela de la John Hopkins School of Advanced International Studies, 1969), p. 3.

²⁹ *Ibid.*, p. 3.

sin escuela se elevó del 17 por ciento en 1961 al 25 por ciento en 1966³⁰. Mientras que la situación en la educación pública se deteriora, los grupos de clase media y alta recurren, cada vez más, a las escuelas privadas como medio de preparación de sus niños para su futuro ingreso en mejores campos ocupacionales. La educación bajo los gobiernos democrático-capitalistas no ha servido de vehículo para la apertura de la sociedad a las clases bajas, pero sí como medio de renovación y revigorización de las grandes desigualdades socioeconómicas. El fracaso de AD-COPEI en elevar el nivel de la vivienda, renta y empleo, de los pobres tanto urbanos como rurales, en eliminar la explotación y por ende estabilizar la vida familiar de las clases bajas ha llevado a la elevada tasa de deserción escolar. La expansión cuantitativa de las facilidades y gastos educacionales han tenido muy poco efecto, si no nulo, en la democratización de la sociedad venezolana.

El desempleo y subempleo rurales, que llegan al 55 por ciento de la población económicamente activa (PEA), han dado origen al éxodo en gran escala hacia Caracas y otras ciudades³¹. Muchos de los refugiados rurales se encuentran ocupados en los trabajos peor pagados del sector de servicios. Mientras el petróleo y la minería proveen de 600 trabajos por año y la industria 10.500, el comercio y los servicios proveen 26.800³². El sector terciario abarca actualmente el 43 por ciento de la PEA, y el secundario, el 18 por ciento. En otras palabras, por cada obrero industrial existen 2,3 obreros de servicios. Más específicamente, por cada obrero industrial existen casi dos trabajadores en los servicios domésticos³³.

En términos de distribución del ingreso, las vastas desigualdades que existían durante la década de 1950 persistieron durante los años de gobierno democrático-capitalista. El más bajo 30 por ciento de la población obtiene el 6 por ciento del ingreso nacional, mientras que el 10 por ciento superior percibe el 38 por ciento³⁴. La brecha es probablemente mucho mayor debido a las grandes cantidades de ingre-

³⁰ *Ibid.*

³¹ Alberto Morales Tucker, *op. cit.*, p. 32.

³² Cifras anuales extrapoladas de Revenga, *op. cit.*, Cuadro 1.

³³ José Agustín Silva Michelena, "El Siglo xx", *Ruedo Ibérico*, N^o. 22-24, p. 99.

³⁴ *Estudios sobre la distribución del ingreso en América Latina: Anexo Venezuela*, CEPAL E/CN.12/770, octubre de 1966.

sos no declarados y que pertenecen a la clase alta de inversionistas y financistas³⁵.

Conclusión

Los partidos demócrata-capitalistas han jugado un importante papel en la estabilización de las relaciones capitalistas de la propiedad y en la defensa de las prerrogativas de las élites comerciales de la sociedad venezolana. Un estudioso de la política venezolana ha señalado, perspicazmente: "El verdadero poder en el sector económico está en manos de... conglomerados que no tienen necesidad de un grupo de interés intermediario para sus tratos con el gobierno"³⁶. Los políticos venezolanos han permitido la libre discusión y competencia entre los partidos que apoyan diferentes estrategias para el desarrollo capitalista. AD-COPEI sirvieron de instrumento para la derrota del desafío nacionalista-populista que amenazaba los pilares de la propiedad de la sociedad venezolana. Lograron contrarrestar con éxito el desafío de la derecha, que trató de reemplazar al parlamento por un régimen centralista y autoritario. En términos sociales, AD creó un nuevo grupo agrícola de clase media en el campo con la reforma agraria, beneficiando sustancialmente a alrededor del 15 por ciento de los campesinos anteriormente sin tierras.

A través de la expansión del sistema educacional y de los organismos estatales, AD aumentó las oportunidades para las clases media y media baja. Ha promovido los organismos gubernamentales relacionados con el desarrollo y ha proveído de asistencia financiera a los hombres de negocios tanto rurales como urbanos. Al mismo tiempo, la red organizativa de AD ha aislado efectivamente a la masa de pobladores de barrios pobres y a los campesinos sin tierra de los partidos políticos de izquierda y grupos orientados hacia la puesta en práctica de sus demandas. En ausencia de la izquierda, el ala derecha de COPEI y la derecha antiparlamentaria han capitalizado el descontento de las masas marginadas, especialmente en Caracas, para así desplazar la influencia que pudo haber tenido AD. La elección de Caldera y la re-

³⁵*Ibid.*

³⁶David Blank, "Political Conflict and Industrial Planning in Venezuela", (trabajo mimeografiado presentado a la Conferencia sobre Venezuela de la John Hopkins School of Advanced International Studies, 1969), p. 16.

sonante victoria electoral de Pérez Jiménez en la elección senatorial de 1969 en Caracas, indican, pues, el rechazo de la mayoría de la población respecto de la integración de AD con el estrato medio burócrata y propietario.

El partido Acción Democrática ha puesto en práctica una estrategia de desarrollo socioeconómico principalmente orientado hacia la promoción de la clase media dentro de las limitaciones económicas establecidas por los intereses de propiedad estadounidense y venezolano. En ello, ha obtenido, relativamente, cierto éxito. No obstante, los demócrata-capitalistas no han logrado cambiar la estructura económica semicolonial de la nación. El desarrollo económico venezolano continúa siendo materia de decisión de parte de los intereses petroleros norteamericanos. Es más, los nuevos capitalistas "nacionales" se hallan en una posición altamente dependiente de los intereses corporativos estadounidenses. Por ejemplo, un estudioso dice lo siguiente: "Muchos de los fabricantes de repuestos, aparentemente independientes, se hallan de hecho 'cautivos' del ensamblador extranjero de automóviles, y su producción se dirige exclusivamente al ensamblaje de cierta marca de automóvil"³⁷. La fuga de capital en Venezuela a través de las remesas de ganancias de empresas propiedad de inversionistas norteamericanos ha sido un factor importante en el estancamiento económico general de Venezuela. El promedio anual de ganancias e intereses alcanzan la suma de 650 millones de dólares³⁸. Por cada nuevo dólar invertido, los inversionistas norteamericanos reciben una ganancia de tres dólares³⁹.

Las aspiraciones políticas y los apetitos socioeconómicos de los hombres de negocios pertenecientes a la clase media, de los burócratas y de los profesionales (especialmente los abogados) han sido satisfechos principalmente a través de la participación y la actividad de sus representantes partidistas tanto en el Congreso como en el poder ejecutivo. Los representantes políticos de este mismo estrato medio

³⁷*Ibid.*, p. 32.

³⁸D. F. Marcos Zavala, "Problemas principales y situación actual", *Ruedo Ibérico*, N° 22-24, p. 58.

³⁹Rodolfo Quintero, "Las tres conquistas de América Latina", *Ruedo Ibérico*, N° 22-24, p. 44.

han sido, principalmente, los responsables de la transformación del Estado en un instrumento para el desarrollo industrial capitalista, en la limitada proporción en que éste se ha producido. Para poder obtener la estabilidad política necesaria para alcanzar las metas económicas del sector urbano, los políticos pertenecientes a la clase media organizaron el apoyo campesino y crearon una nueva clase agrícola comercial. Sin embargo, la "reforma agraria" venezolana se vio limitada por la máxima preocupación de AD: *obtener una base política de apoyo para el desarrollo capitalista urbano y rural*. Una vez establecida, firmemente, la base entre los agricultores comerciales, AD se volvió de la reforma a la "modernización". AD-COPEI han tenido éxito sólo en iniciar el desarrollo capitalista y después en representar los intereses de la, asimismo, exitosa clase media administrativa y propietaria. Al hacerlo, AD estaba dispuesta a sacrificar las necesidades socioeconómicas de la gran mayoría de la población venezolana; la independencia de la economía venezolana respecto a la dominación norteamericana; y la libertad política (y las vidas) de la joven generación de venezolanos nacionalistas y revolucionarios. El resultado de los esfuerzos capitalistas democráticos de Venezuela son difícilmente atractivos para las grandes masas empobrecidas de América latina, para los nuevos nacionalistas populistas de la Iglesia y del ejército o para los estudiantes revolucionarios e intelectuales universitarios.

Septiembre de 1970